

La Ley de la Ciencia pasa su primer examen

El Gobierno espera aprobarla con el apoyo de PNV y BNG

NUÑO DOMÍNGUEZ
MADRID

Después de más de dos años de redacción, y lastrada por la crisis económica, la Ley de la Ciencia con la que el Gobierno pretende modernizar el sistema de investigación español pasa hoy su primer gran examen parlamentario.

El Gobierno espera ver aprobada la norma gracias a los apoyos del PNV y BNG, que agrupa el voto del Grupo Mixto en la Comisión de Ciencia e Innovación del Congreso, donde se vota la ley esta tarde, según explicaron ayer fuentes del Gobierno. Sumando esos apoyos y los del Grupo Socialista, la ley podrá ser aprobada y comenzar su debate en el Senado.

ERC también votará a favor, según aseguró ayer Francesc Canet, portavoz del grupo que engloba a este partido, ICV e IU dentro de la comisión. «La única duda es si el PP se abstendrá o votará en contra», señalan fuentes del Grupo Socialista. Tras su trámite en la Cámara Alta, el texto volverá al Congreso de los Diputados para su debate final.

Entre los objetivos de la norma, ante la que los grupos han presentado 452 enmiendas, están el sustituir las becas a investigadores por con-



La Ley de la Ciencia cambiará becas por contratos. SINC

El PP denuncia «salarios disparatados»

El Gobierno desveló ayer que Joaquín Casariego, director del Consorcio de Apoyo a la Investigación Biomédica en Red (Cabimer), cobra 131.016 euros al año, casi el doble que la ministra de Ciencia, Cristina Garmendia, informa EP. El Ejecutivo desveló ayer este sueldo a preguntas del PP, que lo calificó de «disparatado». Fuentes del Ejecutivo matizan que los sueldos en este tipo de puestos deben competir con los del sector privado y que el de Cabimer no es el único caso.

tratos laborales. También se crea la Agencia Estatal de Financiación de la Investigación, un organismo independiente para gestionar los fondos públicos de I+D cuyo desarrollo es problemático dentro del Gobierno debido a que enfrenta competencias de varios departamentos. La norma llegó al Parlamento con la oposición de los sindicatos, la agrupación de sociedades científicas españolas, COSCE, y los grupos de jóvenes investigadores como la Plataforma Investigación Digna, agrupada en torno a una carta abierta firmada por 2.600 investigadores, rectores y directores de organismos públicos de I+D. •